

Nº --- 1237

30 MAY 2023

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ de Fecha _____

Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el Decreto 507 del 06 de noviembre de 2013 en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y

ANTECEDENTES:

Que mediante **Resolución No. 2089 de 2 de junio de 2022**, proferida dentro de la investigación administrativa No. 357-2022 el Despacho decidió: **SANCIONAR** a la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**, identificada con NIT 800251440-6 y código de Prestador 1100124826-16, dirección de notificación en la **AC 100 No. 11B - 95** de Bogotá, con Email notificacionesjudiciales@keralty.com y jmgarcia@keralty.com, en cabeza de su Representante Legal y/o quien haga sus veces, con multa de **TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2022**, es decir la suma equivalente a **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000)** por infringir las normas citadas en referida providencia.

Que el acto administrativo sancionatorio fue notificado el día **9 de junio de 2022** por lo cual el representante y/o apoderado de la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA** decide interponer recurso de reposición y apelación dentro del término legal el día **22/06/2022**.

Que mediante **Resolución No. 3483** de fecha **19/07/2022**, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, **CONFIRMÓ** la sanción y concedió el recurso de Apelación ante el Despacho del señor Secretario Distrital de Salud de Bogotá.

HECHOS

Para el caso en concreto, la presente investigación se originó de oficio con radicado con el No. **2019ER50989 del 02-07-2019** remitido por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de salud dispensados a los pacientes con síntomas de dengue grave a partir de la semana 24 de 2019 y que no fueron hospitalizados, por parte de la institución denominada **EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**.

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha 2022 "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

ARGUMENTOS DEL RECURSO

Corresponde a este Despacho de acuerdo con la competencia otorgada en el artículo 3 del numeral 7 del Decreto 507 de 2013, resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del término legal, por el representante y/o apoderado de la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA** quien manifiesta lo siguiente:

En la decisión impugnada se desconocieron las pruebas exhibidas por la defensa, sin sustento alguno y dando única validez al acta de visita. Reprocha también, la falta de claridad en los cargos, por cuanto en su descripción no se definió con especificidad el estándar presuntamente quebrantado, y por que considera que estos fueron modificados en la resolución recurrida. Señala que, al momento de imponer la sanción, solo se valoran las circunstancias agravantes, y no las atenuantes.

También objeta el monto de la multa, por cuanto considera que al momento de tasarla se violó al principio de legalidad, y se desconocieron los pronunciamientos del consejo de estado, donde se ha advertido que las multas derivadas de procesos sancionatorios se deben fijar con base al salario vigente al momento de generación de la conducta.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como lo dispone la Constitución Política Colombiana en su artículo 49 "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección, y recuperación de la Salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficacia, universalidad, y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y Control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación. Las entidades territoriales y los particulares determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley".

Por lo que toda investigación administrativa tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta desplegada por el presunto infractor, determinar si es constitutiva de falta contra las normas que regulan la prestación del servicio de salud, establecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrió el perjuicio causado al usuario y la responsabilidad a que haya lugar en cabeza del prestador.

Ahora bien, previo a resolver la cuestión planteada por el recurrente, es necesario advertir que la finalidad perseguida con el Recurso de Apelación presentado no es otra, que garantizar que la decisión

Página 2 de

30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

tomada en primera instancia mediante **Resolución No. 2089 de 2 de junio de 2022**, se haya ajustado al ordenamiento jurídico, tanto en su carácter sustancial como en su esencia procedimental.

Con el fin de verificar los hechos mencionados en la parte inicial, dados a conocer mediante oficio con radicado con el No. **2019ER50989 del 02-07-2019** remitido por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de salud dispensados a los pacientes con síntomas de dengue grave a partir de la semana 24 de 2019 y que no fueron hospitalizados, por parte de la institución denominada **EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**, se solicitó a un profesional de la salud adscrito a la Secretaría Distrital de Salud la elaboración de un Concepto Técnico Científico en el cual se analiza la calidad de la prestación del servicio, por parte de la entidad investigada, exponiendo lo siguiente:

"(...) MARIA ROCIO NIVIA VILLAMIL, en la atención en salud brindada al prestársele la atención en consulta por fuera del tiempo definido en su protocolo de triage, se considera una presunta falla institucional en los atributos de: OPORTUNIDAD ante las demoras entre la realización de triage y atención inicial, CONTINUIDAD ante la falta de seguimiento intrahospitalario toda vez que cursaba con trombocitopenia menor de 100.000, y SEGURIDAD, toda vez que se identifica una atención insegura tipo 2, de acuerdo con los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente.

Adicionalmente, ante la falta de adherencia al protocolo de triage aportado en relación a los tiempos estimados de espera acorde a la clasificación asignada en este caso 3, se considera como incumplimiento al manual único de habilitación especialmente en lo relacionada con el estándar de PROCESOS PRIORITARIOS.

MARIELINA BARRERA ALARCON, en la atención en salud brindada no se garantizó la característica de la calidad: SEGURIDAD toda vez que se identifica una atención insegura tipo 3 de acuerdo con los lineamientos para la implementación para la política de seguridad del paciente, por lo que se considera que hubo presuntas fallas institucionales.

Ante la falta de la completitud de los requisitos se considera como incumplimiento al manual único de habilitación especialmente en lo relacionado con el estándar de HISTORIA CLINICA Y REGISTROS. (...)"

Concluidas las averiguaciones preliminares, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, mediante **Auto No. 3572 del 23 de marzo de 2022**, formuló Pliego de Cargos en contra de la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**, por infringir disposiciones vigentes en salud, profiriendo los cargos que se resumen a continuación:

CARGOS: Violación al Decreto 780 de 2016 en concordancia con la Ley 1438 de 2011, la Ley 100 de 1993 y la Resolución 2003 de 2014. "oportunidad, seguridad, historia clínica y registros"

30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

Frente a los argumentos manifestados por la defensa:

Al analizar el contenido del expediente, se logra establecer que es obligación de las instituciones prestadoras de los servicios en salud garantizar las características de oportunidad, seguridad, historia clínica y registros. Por ello en cuanto a la falla de seguridad aludida, este Despacho debe insistir en que la calidad del servicio de salud que se presta por parte de una entidad hospitalaria debe propender por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso o mitigar sus consecuencias, toda vez que esta falla en la seguridad permite establecer que estos protocolos en el manejo de pacientes, no estaban funcionando, por lo menos, en cuanto al caso que nos ocupa.

Este Despacho considera propicio recalcar a la institución investigada, que el servicio de salud es un servicio público y, quienes están autorizados por la Ley para prestarlo, deben hacerlo de manera óptima, garantizando el cumplimiento de sus fines y los derechos de quienes a él concurren en ejercicio de las garantías establecidas en la Constitución y la Ley; cuando dicho servicio no alcanza el fin o propósito perseguido, se presume su deficiente funcionamiento.

Igualmente, se le informa al recurrente que por tratarse de un derecho público, no es posible excusar o justificar el incumplimiento de las normas que rigen su prestación, pues dada la naturaleza de las mismas, la obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud es permanente y continua, y en ese orden de ideas no es necesario que se configure un daño y/ o se ponga en riesgo la salud de los pacientes, para que la institución encargada de la prestación entre a responder ante la entidad competente.

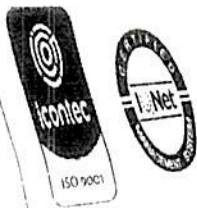
Aunado a lo anterior, la calidad de la atención de salud debe ser entendida como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr adhesión y satisfacción de los usuarios.

De conformidad con Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.2.1 Características del SOGCS. **La Oportunidad.** Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.

De conformidad con el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.2.1 Características del SOGCS. **la Seguridad.** Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Pertinencia: Garantía que los usuarios reciban los servicios que requieren.

Página 4 de

Carta N. 12 63
Unidad de
Los Caballeros



Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

Conforme lo anterior se demuestran las fallas en la prestación del servicio en salud y la idoneidad del personal que clasifica el **triage**, y los argumentos expuestos por el recurrente no desvirtúan los cargos, pues la única prueba que pudiera hacerlo, es que se hubieran realizado las acciones correspondientes a una atención pertinente a la paciente y que la información estuviera inmersa en la historia clínica lo cual no evidencia, así las cosas, la objeción que se hace frente a las infracciones cometidas no tienen sustento probatorio.

Por ende, la protección al derecho fundamental a la salud no se limita simplemente al reconocimiento de los servicios que se requieren con necesidad, sino que comprende también su acceso de manera oportuna, eficiente y de calidad. La prestación del servicio de salud es oportuna cuando la persona lo recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. En forma similar, el servicio de salud se considera eficiente cuando los trámites administrativos a los que se somete al paciente para acceder a una prestación requerida son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir.

Para el caso en comento vale la pena resaltar la importancia del diligenciamiento de la **Historia Clínica**, como es el poder del conocimiento que permite interpretar más acertadamente la realidad, la historia clínica así considerada constituye una valiosa herramienta de conocimiento de singular importancia desde diversas perspectivas, pues permite identificar la atención médica, la calidad del servicio brindado, e igualmente asegurar una adecuada prestación de servicios, sirviendo sobre todo como guía o derrotero a los diferentes profesionales que intervienen, y muy particularmente, como medio probatorio a la hora de definir responsabilidades civiles, penales, administrativas o éticas.

La **historia clínica** es un documento privado que comprende una relación ordenada y detallada de todos los datos acerca de los aspectos físicos y psíquicos del paciente. El artículo 34 de la Ley 23 de 1981 define dicho documento como "el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley".

Historia clínica que se encontraba bajo la potestad de la entidad investigada, se constituye como el único archivo o fuente de información donde lícitamente reposan todas las evaluaciones, pruebas, diagnósticos e intervenciones realizadas al paciente, al igual que los procedimientos y medicamentos que le fueron suministrados, los resultados logrados como también la evolución del paciente, también debe exponer detalladamente la integración del equipo interviniente, el registro anestésico, los estudios complementarios, y demás pertinentes a las que se surjan entre la relación con la entidad prestadora de servicios de salud para con el paciente.

Además de lo expuesto en el presente escrito, la **historia clínica** lleva inherente consigo una serie de requisitos formales y características, los cuales son la secuencialidad, disponibilidad, oportunidad, racionalidad científica, unicidad, uniformidad y una estructura.

30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha 28-05-2023 "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

Por lo dicho anteriormente, el debido cuidado que se le debe brindar a la **historia clínica** abarca consigo un método debidamente organizado para garantizar la protección de la misma, puesto que abarca un pilar esencial con una clara razón de ser dentro de la prestación del servicio de salud, inclusive cumple una función primordial en el orden constitucional para garantizar la debida protección del derecho fundamental a la salud, como también en la necesidad de garantizar el respeto por la dignidad humana.

El operador jurídico de la norma, debe tener en cuenta el contenido de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 153 de 1887 "Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula integralmente la materia á que la anterior disposición se refería.", lo anterior en armonía con el artículo 14 de la misma disposición normativa según la cual "Una ley derogada no revivirá por sí sola las referencias que á ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva".

En consonancia con lo anterior la Constitución Política artículo 4 prevé "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales." Esto en consonancia con lo previsto en el artículo 6 de la misma norma "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."

En atención a la **falsa de motivación** del acto administrativo el CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero Ponente MILTON CHAVES GARCIA de FALSA MOTIVACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO (radicación No. 11001- 03 -07 -000 -2018 – Alcance / FALSA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – la Sección Cuarta ha precisado que esta "causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente". Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente: "La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal indole, que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición

Página 6 de

Canal 12
Teléfono 261.23.23
www.12.com.co



Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto". (...)

Se le advierte a la recurrente que respecto a los argumentos que sustenta en el recurso de apelación como **FALSA MOTIVACIÓN** e **INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA**, es pertinente señalar que para iniciar la presente investigación administrativa, se ha garantizado el debido proceso en todas sus etapas realizando el análisis jurídico de las pesquisas obrantes en el expediente donde se evidencian las irregularidades en la prestación de los servicios de salud dispensados a las pacientes **MARIA ROCIO NIVIA VILLAMIL** y **MARIELINA BARRERA ALARCON** por parte de la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA** y corroboradas en el Concepto Técnico Científico del profesional de la salud adscrito a la Secretaría Distrital de Salud que fundamentan la Ratio Decidendi.

Así mismo, el artículo 29 establece. "El **debido proceso** se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)". Al respecto, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C – 713 de 2012, con ponencia del Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, precisó: (...) "el artículo 29 constitucional dispone que el debido proceso "se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", constituyéndose en la regulación jurídica previa que limita los poderes del Estado y garantiza la protección de los derechos de los administrados, de manera que ninguna de las actuaciones de la autoridad pública dependa de su propio arbitrio, sino se encuentre sometida a los procedimientos establecidos en la ley. Por su parte, el inciso 2 del artículo 29 de la Constitución Política, prescribe que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", todo ello, con el fin de garantizar el debido proceso, dentro del cual se reconoce como pilar fundamental el principio de legalidad.

Esta Corporación ha señalado que el principio de legalidad exige: "(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable" y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su materialización participen, los principios de reserva de ley y de tipicidad. (...)

De acuerdo a lo transcrito, ésta Autoridad Administrativa puede concluir que los principios de debido proceso, favorabilidad, legalidad y tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio, adquieren vital relevancia por hacer parte del derecho al debido proceso, del tal suerte que los servidores públicos entre sus deberes no solo deben cumplir, sino también garantizar que se cumplan con "diligencia,

30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función".

En el caso que nos ocupa **Resolución 2003 de 2014** (vigente para la época de los hechos), Artículo 3 "Numeral 3.3 "Capacidad Tecnológica y Científica", y su "Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud", de la misma Resolución, Artículo 2.3 Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica, Numeral 2.3.1 Estándares de habilitación, Numeral 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Numeral 2.3.2.1 Todos los servicios, Este Despacho advierte que la Resolución 2003 de 2014 la cual ha sido objeto de infracción en la presente investigación, fue derogada por la Resolución 3100 de 2019. Si bien es cierto, que para la época de los hechos se encontraba vigente, también lo es, que a la fecha de formulación del pliego de cargos y la imposición de la sanción ésta había sido derogada, es decir, que al proferirse el **Auto No. 3572 del 23 de marzo de 2022 y la Resolución No. 2089 de 2 de junio de 2022**, se desconoció que la Resolución 2003 de 2014 había sido derogada por la Resolución 3100 de 2019, luego no era procedente formular pliego de cargos y más aún, imponer la sanción administrativa a la luz de dicho cuerpo normativo.

Así las cosas, si bien la autoridad administrativa tiene la obligación de investigar el incumplimiento a las disposiciones normativas, también lo es, que su actuar no puede pretender sacrificar injustamente los derechos fundamentales de los investigados y ponerlos en una condición de inseguridad jurídica; imponiendo sanciones fundamentadas en disposiciones regulatorias que han salido del ordenamiento jurídico, y que además desgastan a la administración en un procedimiento que a posteriori va a quedar sin efectos, lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 numeral segundo de la Ley 1437 de 2011 la cual reza:

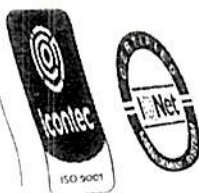
"Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

(...) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho (...)"

Luego entonces, es incoherente que la autoridad administrativa encargada de aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio imponga sanciones con disposiciones normativas derogadas, las cuales, al momento de adquirir firmeza, no se puedan ejecutar.

Es así que este Despacho respetuoso de las garantías constitucionales y legales en mención, a de señalar que al proferirse la **Resolución No. 2089 de 2 de junio de 2022**, se desconoció que la **Resolución 2003 de 2014** esto es, norma vulnerada por el **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**, había sido derogada

Cartera 52 No. 12-81
Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud



30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 12371 de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

por Resolución 3100 de 2019, luego no era procedente imponer la sanción administrativa a la luz de dicho cuerpo normativo.

En este orden de ideas, por haber desaparecido uno de los fundamentos jurídicos soporte de la sanción, estima esta Instancia Administrativa que lo procedente es exonerar al prestador de servicios de salud, de las fallas endilgadas SOLO con relación a la vulneración de la Resolución 2003 de 2014 (vigente para la época de los hechos), Artículo 3 "Numeral 3.3 "Capacidad Tecnológica y Científica", y su "Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud", de la misma Resolución, Artículo 2.3 Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica, Numeral 2.3.1 Estándares de habilitación, Numeral 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, Numeral 2.3.2.1 Todos los servicios, en algunos de los criterios de los Estándares de: "Procesos Prioritarios" de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del acto administrativo puesto que no es factible continuar con el trámite administrativo sancionatorio, cuando no existe un sustento normativo, legal y debidamente tipificado que respalde no sólo la clasificación de la conducta como falta, sino, además, que establezca los parámetros para imponer la sanción.

Ahora bien, en cuanto a la **proporcionalidad y razonabilidad de la sanción**, importa señalar que la enervación de la presunción de inocencia requiere que se demuestre la culpabilidad del individuo, la cual se orienta por tres principios. (i) El principio de responsabilidad de acto, pues en un Estado Social de Derecho sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. (ii) La responsabilidad derivada de la comisión de delitos y faltas es subjetiva. Y (iii) se debe tener en cuenta el grado de culpabilidad para imposición de la pena, de tal manera que a su autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad.

El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada sanción resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza.

En esta dirección el legislador estableció en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011 los siguientes criterios para la graduación de la sanción:

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.

30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. 1237 de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

En este orden de ideas, la sanción debe ser proporcional al grado de culpabilidad; razón por la cual el legislador estableció un plexo de sanciones administrativas precisamente con el fin de que estas resulten adecuadas al fin que se persigue, pero, además, respondan a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, de manera que la autoridad administrativa debe realizar un test de proporcionalidad.

Advierte esta instancia que las faltas reseñadas por violación a la normatividad en salud, se mantienen incólumes. Ello es teniendo en cuenta el análisis de los hechos y la evaluación de la información aportada en relación con la queja.

Con fundamento en las anteriores consideraciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2089 de 2 de junio de 2022, proferida dentro de la investigación administrativa No. 357-2022 en la cual el Despacho decidió: **SANCIONAR** a la institución denominada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA**, identificada con NIT 800251440-6 y código de Prestador 1100124826-16, dirección de notificación en la AC 100 No. 11B - 95 de Bogotá, con Email notificacionesjudiciales@keralty.com y jmgarcia@keralty.com, en cabeza de su Representante Legal y/o quien haga sus veces, con multa de **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2022**, es decir la suma equivalente a **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del contenido de esta Resolución a la parte interviniente haciéndole saber que contra la presente decisión no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO: Si no fuere posible notificar personalmente dentro del término previsto, deberá hacerse conforme con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página 10 de



30 MAY 2023

Continuación de la Resolución No. _____ de fecha _____ "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Investigación Administrativa No. 357-2022 adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud".

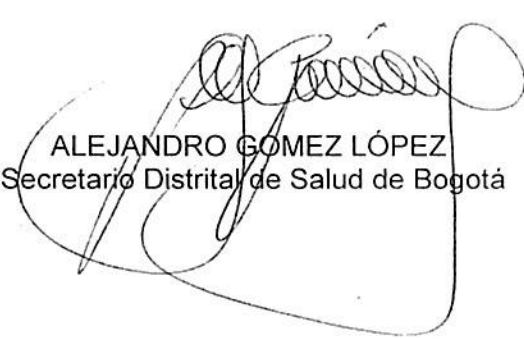
ARTICULO TERCERO: Notificada la presente providencia se ordena devolver el expediente a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para que continúe con el trámite legal a que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá a los

30 MAY 2023

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
Secretario Distrital de Salud de Bogotá

Elaboró: Alex Sandoval
Revisó: J.C. Lozano
Aprobó: Blanca Rodríguez



000101

Bogotá D.C

Señor(a)

Representante legal

**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. - EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS
PUENTE ARANDA**

notificacionesjudiciales@keralty.com

Ciudad

CORREO POSTEXPRESS

ASUNTO NOTIFICACION ELECTRÓNICA

En atención a lo ordenado por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, por este medio le notificó la Resolución Por la cual se resuelve un recurso de Apelación dentro de la actuación Administrativa No. **357-2022** adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá”.

Se le advierte que la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo.

Cordialmente,


JULIO CESAR LOZANO M.
Profesional Universitario
Oficina Asesora Jurídica

Alex Sandoval

